

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857).—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean de parte de un pobre, se insertarán oficialmente como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagaran su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.

Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero. Colón, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa en esta Corte sin novedad en su importante salud.

El Excmo. Sr. Mayordomo Mayor de S. M., Jefe superior de Palacio, dice con fecha de ayer al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros lo siguiente:

«Excmo. Sr.: El Excmo. señor Marqués de San Gregorio, Presidente de la Facultad de la Real Cámara, me dice, á las nueve de la mañana de hoy, lo que sigue:

«Excmo. Sr.: S. M. la Reina nuestra Señora ha pasado la noche con insomnio e inquietud á consecuencia del crecimiento de la fiebre observado á la una de la madrugada. La fiebre es en la actualidad de índole gástrica. Continúan las molestias de los días anteriores.»

Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 20 de Junio de 1878.—El Jefe superior de Palacio, el Marqués de Alcañices.—Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

Excmo. Sr.: El Excmo. señor Marqués de San Gregorio, Presidente de la Facultad de la Real Cámara, me dice, á las once de la noche de hoy, lo que sigue:

«Excmo. Sr.: S. M. la Reina nuestra Señora ha pasado el día con menos inquietud y dormido algunos ratos. Desde el medio día ha disminuido la intensidad de la fiebre y la frecuencia del vómito.»

Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio 20 de Junio de 1878.—El Jefe superior de Palacio, el Marqués de Alcañices.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

La Serma. Sra. Princesa de Asturias, y las Sermas. señoras Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia continúan sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

Por Real orden circular de 10 del corriente, inserta en el Boletín número 172 del día 16, se derogó la orden circular de 5 de Agosto de 1870 y la Real orden de 1.º de Julio de 1875 sobre expedición de pasaportes para el extranjero, restableciendo en toda su fuerza el Real decreto de 17 de Diciembre de 1862.

En su consecuencia ha acordado publicar á continuación el citado Real decreto, con objeto de que las Autoridades y el público en general tengan presentes las disposiciones que quedan en vigor y procuren su cumplimiento.

Orense 21 de Junio de 1878.

El Gobernador.

BARTOLOME MOLINA.

Real decreto de 17 de Diciembre de 1862 que queda vigente.

Señora: La experiencia adquirida en los ocho años pasados desde que se suprimieron los pasaportes dentro del Reino, demuestra la inutilidad de aquellos documentos y la conveniencia de derogar el artículo 7.º del Real decreto de 15 de Febrero de 1854, que los dejó subsistentes para el extranjero y las provincias de Ultramar. Los pasaportes no existen en Inglaterra desde hace mucho tiempo, ni en Francia, Prusia, Cerdeña, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega y Suiza, donde no están obligados á presentarlos y refrendar pasaportes los súbditos de los Estados en que han de obtener

franquicia acerca de este punto, bastando solo que lleven consigo un documento con el cual puedan acreditar su personalidad en caso necesario, ni en los Estados de América y del Norte de África.

Es de esperar, por consiguiente, que en breve término el resto de los Gobiernos civilizados abandonen una práctica que, sin garantizar ningún género de intereses, opone verdaderos obstáculos al desenvolvimiento de las relaciones industriales y comerciales, en que se cifra el porvenir de las naciones modernas. No es conveniente prescindir, sin embargo, de ciertas precauciones de policía que son indispensables á todos los Gobiernos, y que han conservado, según queda expuesto anteriormente, casi todas las naciones en que ha tenido lugar la reforma.

Por esta razón exige el adjunto proyecto de Real decreto para entrar en España, que traiga el extranjero un documento cualquiera con que acreditar su nacionalidad; ó en otro caso, que quede obligado á darse á conocer por medio de personas de confianza de las Autoridades, las cuales tendrán la facultad de hacer cumplir tales formalidades cuantas veces lo conceptúen oportuno.

En ellas ha buscado el Ministro que suscribe la equivalencia de la cédula de vecindad que están obligados á poseer según las disposiciones vigentes, los súbditos españoles; y no puede decirse ciertamente que en la comparación resulten desfavorecidos los extranjeros. Adoptado con entero convencimiento este sistema por el Gobierno de V. M., entra naturalmente en sus miras el propósito de entablar las gestiones oportunas á fin de que en los Estados en los cuales se exigen aun los pasaportes á los extranjeros, y están éstos sujetos todavía á la obligación de refrendarlos, queden eximidos de tales formalidades los súbditos nacionales, en justa reciprocidad de las franquicias que han de obtener

todos los extranjeros, sin distinción en adelante en España: sin exigir por eso que comprometa irrevocablemente su libertad de acción en este punto ningún Gobierno, por lo mismo que el de S. M. la Reina desea conservarse la entera á sí propio para reformar siempre lo que le aconsejen las circunstancias, y atender en cualquier forma que estime conveniente en adelante á la protección de los altos intereses que le están encomendados.

Indispensable es al propio tiempo que continúe la justa prohibición de viajar sin garantías por el extranjero á los mozos sujetos á la sueta del reemplazo para el ejército, con arreglo á la ley sancionada por S. M. en 30 de Enero de 1856, y aun á juicio del Ministro que suscribe, sería conveniente que esta disposición se extendiera á los mozos que pasan á las posesiones de Ultramar sin estar libres todavía de la responsabilidad de la quinta, á los cuales según la citada ley, no se exige depósito ni fianza, de donde nacen graves perjuicios para los suplentes y los pueblos.

Dejando no obstante, esto último para el proyecto de Ley que próximamente debe presentarse á las Cortes sobre el reemplazo del Ejército, en el cual habrán de proponerse otras varias reformas igualmente necesarias, desde ahora debe anunciar el Ministro que suscribe que el interés gravísimo de la defensa del Estado exige en esta materia poner límites generales y eficaces á la libertad absoluta de viajar de que gozaran en adelante los demás súbditos nacionales lo mismo que los extranjeros.

Fundado, pues, en estas varias consideraciones, el Ministro que suscribe está en el caso de proponer á la aprobación de V. M. de acuerdo con el Consejo de Ministros, el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 17 de Diciembre de 1862.

Señora.—A. L. R. P. de V. M.
José de Posada-Herrera.

REAL DECRETO.

Conformándose con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con mi Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se suprimen desde 1.º de Enero del próximo año de 1863 los pasaportes que se exigen aun a los viajeros para pasar al extranjero, con arreglo al artículo 7.º del Real decreto de 15 de Febrero de 1854.

Art. 2.º Quedan subsistentes todas las demás disposiciones que contiene el referido decreto.

Art. 3.º Para evitar que los mozos sujetos al reemplazo eludan su responsabilidad saliendo fuera del reino se les dará cédula de vecindad; con este destino, sino garantizan antes que estarán a las resultas de la suerte que pueda tocarles, consignando en depósito la cantidad de 8.000 reales, u otorgando escritura de fianza suficiente con arreglo a la ley de reemplazos de 30 de Enero de 1856.

Art. 4.º Desde 1.º de Enero de 1863 dejará de exigirse a los extranjeros para entrar en España la presentación de pasaporte; pero deberán de traer cédula de vecindad, cartillas de servicio, si son criados o artesanos, o cualesquiera otros documentos que acrediten su personalidad, el lugar de su procedencia y objeto de su viaje al Reino. La presentación de este documento podrá ser exigida por las autoridades o sus agentes cuantas veces lo estimen necesario.

Art. 5.º Será también admitido en el Reino cualquier extranjero con su sola presentación a la autoridad, aunque carezca de todo documento siempre que dé a conocer su personalidad por medio de una declaración que firmen dos vecinos o residentes en la población o lugar en que se presenta, para dar testimonio de que lo conocen y de que es verdad lo que declara, y siempre que manifieste al mismo tiempo el punto de su residencia y el objeto de su viaje.

Art. 6.º Quedan suprimidos el refrendo de los pasaportes por los Consules españoles y la retribución de 8 reales que según el artículo 85 del reglamento de policía de 1824 se exige aun por los empleados del ramo de las provincias fronterizas a los extranjeros que entran en España, excepto a los súbditos portugueses respecto de los cuales se abolió por la ley de 3 de Junio de 1855.

Art. 7.º No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, continuarán expidiéndose pasaportes a los que lo soliciten para viajar por los Estados donde no se

haya suprimido este requisito, presentando la cédula de vecindad en la forma que previenen en esta parte las disposiciones vigentes.

Art. 8.º De este Real decreto se dará cuenta a las Cortes, y el Ministro de la Gobernación comunicará las instrucciones necesarias para su ejecución.

Dado en Palacio a 17 de Diciembre de 1862.—Esta rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada-Herrera.

SECCION DE FOMENTO.

Obras públicas.

El Ingeniero Jefe accidental de Obras públicas de la provincia me dice, en comunicación de ayer, lo siguiente:

Siendo dudosa la estabilidad del primer arco de la avenida de la derecha del Puente Mayor de esta capital, y no prestandose por las circunstancias especiales en que se encuentra a un minucioso reconocimiento sin interrumpir el tránsito durante algunos días, se propuso a la Dirección general del ramo, y aprobó esta, someter dicho arco así como sus timpanos a una prueba de resistencia que no exige se interrumpa aquel por mas de seis horas. Para el caso de un resultado desfavorable, está preparado el material de un tramo provisional de madera que podrá echarse en dos días y sostener la circulación interin, debajo de él se reconstruye el de piedra con las condiciones a que debe satisfacer. La prueba debe llevarse a cabo el 29 del actual de once de la mañana a cinco de la tarde que son las horas, mas apropiadas como de menos tránsito y a las cuales tampoco pasan coches correos.

Lo que se hace público por medio del Boletín oficial para que llegando a conocimiento de las personas a quienes pueda interesar la precisa interrupción del paso por el Puente Mayor de esta capital desde las once de la mañana hasta las cinco de la tarde del día 29 del corriente, o en los dos días siguientes si la prueba aconsejase la construcción de un tramo de madera sobre el arco falseado, procuren hacer el tránsito antes o después de los trabajos anunciados, a fin de evitar de este modo los perjuicios que podría ocasionarles la forzosa detención en aquel sitio.

Orense 22 de Junio de 1878.

El Gobernador.

BARTOLOMÉ MOLINA.

JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO.

Circular.

El Excmo. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Estadístico, con fecha 18 del corriente, me dice lo siguiente:

Al llegar a noticia de esta Dirección general que los Jefes económicos de algunas provin-

cias han pedido directamente a los Alcaldes de los pueblos los resultados obtenidos en el último censo de la población y que varios de ellos los han suministrado, a pesar de lo mandado por Real orden de 7 de Marzo, circulada con igual fecha, para su conocimiento efectos consiguientes, a todos los Gobernadores y Jefes de trabajos estadísticos de las provincias. En su vista y atendiendo a que los Alcaldes solo pueden conocer las cifras de la población según el último empadronamiento general como individuos de las Juntas censales, y teniendo presente que dichas cifras no tienen garantía alguna de exactitud, y no pueden alcanzarse hasta después de terminadas todas las operaciones con arreglo a la Instrucción general, aprobada por S. M. en 2 de Noviembre de 1877, he resuelto llamar muy particularmente la atención de V. S. sobre tan manifiesta y grave contravención de la Real orden de 7 de Marzo antes citada, a fin de que se sirva dictar inmediatamente las disposiciones mas severas para impedir tales trasgresiones, ordenando a todos los Alcaldes, Presidentes y Juntas censales de esa provincia lo prevenido por la Superioridad en este punto.

Lo que he dispuesto se publique en el Boletín oficial de la provincia, a fin de que, sirviendo de gobierno a las Juntas del censo y demás autoridades, procuren su mas exacto cumplimiento.

Orense 22 de Junio de 1878.—El Gobernador-Presidente, Bartolomé Molina.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Castro Caldelas.

Terminado el repartimiento de la contribucion territorial de este Ayuntamiento del año económico entrante de 1878 a 79, se halla expuesto al publico por término de seis dias en la Secretaría del mismo para oír las reclamaciones que se presenten, pasados los cuales desde la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de esta provincia, todas serán desatendidas.

Castro Caldelas Junio 14 de 1878.—El Alcalde, Juan B. Fernandez.

Este Ayuntamiento acordó anunciar la subasta pública de las composiciones de las calles de esta villa, de la fuente llamada Vieja, y construcción de un albarque para lavar, presupuestadas dichas obras en la cantidad de 200 pesetas.

Del mismo modo anuncia la subasta de las obras, tanto de carpintería como de cantería, y llanos, que hay que ejecutar en la casa consistorial de esta dicha villa, bajo el tipo de 1.422 pesetas, cuyos remates tendrán lugar el día 23 del actual de diez a doce de su

mañana en la referida casa consistorial, bajo las condiciones estipuladas en el pliego de las mismas formado al efecto, el cual se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento. Lo que se publica en este Boletín oficial para que lleguen a conocimiento de cuantas personas quieran interesarse en la subasta.

Castro Caldelas Junio 11 de 1878.—El Alcalde, Juan B. Fernandez.

Cenlle.

El día 23 próximo de once a doce de su mañana se sacan en subasta pública los arrendamientos del matadero de reses vacunas, lanar y cabrio, y la venta en tabernas y puestos públicos de los artículos que constan en el pliego de condiciones que se hallará expuesto de manifiesto en dicho día, al que se deberán ajustar los licitadores que deseen tomar parte en los referidos arrendos. En cuyo día y hora se hará la adjudicación al mayor postor, y para el día 30 del corriente mes y hora señalada tendrá lugar el remate definitivo.

Alcaldía de Cenlle 15 de Junio de 1878.—E. T. A. José Maria Godoy.

ANUNCIOS.

YA NO SE COSE A MANO

LAS MEJORES MAQUINAS
"SINGER"

hacen, sin esfuerzo de quien las trabaja, mucha mas costura, mas igual y perfecta, en mucho menos tiempo que cualquier otra.

SE VENDEN A PLAZOS, desde 10 REALES semanales.

Así, cuando se paga un plazo de al maquina, esta ha dejado ya al interesado una utilidad muchas veces mayor que la cantidad desembolsada.

MAS DE 2.000 CASAS ESTABLECIDAS EN EUROPA SOLAMENTE.

para la venta de estas renombradas maquinas garantizadas.

"SINGER"

para modistas, costureras, sastres, guarnicioneros, zapateros, fabricantes de camisas, cuellos, puños, corse, cortes de botinas, guarnecedores, y para toda persona, en fin, que necesite coser cualquier cosa y en cualquier forma.

Pidanse Catalogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta a plazos, en el

DEPOSITO DE ORENSE.

50, PAZ, 50.

En la imprenta de este periódico oficial se halla la venta del

BOLETIN DE VENTAS DE Bienes Nacionales, correspondiente al día 10 del corriente.

IMP. DE J. M. RAMOS Y A. OTERO.

REGLAMENTO

para la ejecución de la ley general de Obras públicas.

Conclusion (r).

En la memoria deberá justificarse la necesidad de la ocupación del dominio público, manifestando además en qué forma y extensión afecta a la obra al uso general establecido sobre el mismo.

En el presupuesto, además de valorar la parte de dominio que se ha de ocupar, se valorará asimismo el perjuicio que al uso general se causa por la ejecución de las obras, incluyendo ambos conceptos en una sola partida.

Al proyecto se acompañará en este caso la carta de pago del depósito de una cantidad equivalente al 1 por 100 del importe del presupuesto de las obras que hubieran de establecerse sobre terreno de dominio público.

Art. 135. Presentado el proyecto se someterá a las informaciones que prescribe el artículo 125, correspondiendo su aprobación al Ministro de Fomento. Si la obra alterase los planes del Estado, deberá presentarse a las Cortes el oportuno proyecto de ley, al tenor de lo prescrito en el art. 54 de la ley general de Obras públicas.

En todo caso no se podrá otorgar concesión de una obra de esta clase sino mediante subasta pública, según determina el artículo 98 de la misma ley.

Art. 136. A la subasta servirá de base el proyecto aprobado, y las proposiciones deberán recaer en primer término sobre rebajas en las tarifas para el uso de la obra, y en igualdad de propuesta, sobre mejora del valor del dominio público que se hubiere de ceder, según la partida que al efecto se hubiere fijado en el presupuesto aprobado al tenor de lo prevenido en el artículo 134.

Art. 137. La concesión se otorgará al mejor postor, por medio de un Real decreto, en el que se fijarán las cláusulas y condiciones indicadas en el artículo 126, y los plazos y términos en que el concesionario deberá abonar al Estado la cantidad que se haya fijado por valor de la parte de dominio público ocupado, y perjuicio por la pérdida de su aprovechamiento general.

La fianza será del 5 por 100 del presupuesto de las obras que se hubieren de ejecutar sobre terrenos de dominio público, y no se devolverá mientras el concesionario no acredite haber terminado las obras de las concesión, según prescribe el artículo 104 de la ley general de Obras públicas.

Las condiciones de caducidad serán las mismas que establece el citado art. 126 de este reglamento.

Art. 138. Cuando para una misma obra se presenten dos o más peticiones de concesiones, se procederá para la elección del proyecto que haya de servir de base a la subasta con arreglo a

lo prevenido en los artículos 127 y 129, según los casos, siguiendo para todo lo demás lo prescrito en los artículos 130, 131 y 132.

Art. 139. Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores de este capítulo se sujetarán en cuanto a su término a sus cláusulas generales, a las formalidades del otorgamiento, al derecho de enajenación por parte del concesionario, a la vigilancia de las obras y a los casos de caducidad, a lo que se establece respecto de cada uno de estos puntos en los artículos del 101 al 105, ambos inclusive, de la ley general de Obras públicas.

Art. 140. Cuando la obra cuya concesión se solicite se encuentre en el caso del núm. 3.º del art. 123, y por lo tanto la parte del dominio público a que afecte no se halle destinada a uso ni aprovechamiento alguno, el peticionario deberá presentar el proyecto arreglado a las condiciones siguientes:

1.º Una Memoria en que se exprese el objeto de la obra, la parte de dominio público que ha de ocupar y la justificación de que esta parte no se encuentra destinada a uso general.

2.º Planos que den clara idea de la disposición de las obras.

3.º Presupuesto aproximado de las mismas.

Acompañarán además las tarifas que se hubieron de establecer por el uso de la obra y las bases para su aplicación.

Art. 141. Se someterá después el proyecto a una información en que serán oídos los funcionarios y corporaciones que designen para cada caso las leyes especiales de Obras públicas y los reglamentos para su ejecución, entre los que deberán siempre consultarse al Ingeniero Jefe de la provincia y al Gobernador, el cual será el que dirigirá las informaciones y remitirá su resultado al Ministerio de Fomento.

El Ministro, por medio de una Real orden, resolverá sobre la concesión; después de oír a la Junta consultiva de Caminos.

Art. 142. En el caso de presentarse mas de una petición para una misma obra, se someterán todas a un examen comparativo en las informaciones a que se refiere el artículo anterior, y se elegirá entre ellas la que mayores ventajas ofrezca a los intereses públicos, y en caso de igualdad de circunstancias la que primero se presentó, sin que en ninguno de estos casos tengan derecho a indemnización alguna los demás peticionarios.

Art. 143. Las cláusulas esenciales de las comisiones a que se refiere el art. 140 y siguientes serán:

1.º La fianza que deberá prestar el concesionario en garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Esta no deberá exceder del 1 por 100 del importe del presupuesto de las obras que afecten al dominio público, y será devuelta al interesado cuando tuviere obras ejecutadas por valor de la tercera parte de dicho presupuesto.

2.º La fecha en que debe principiar y terminar las obras.

3.º El plazo de la concesión, que podrá ser perpetua en los

casos en que así lo establezcan las leyes especiales de Obras públicas.

Art. 144. Estas concesiones caducarán cuando no se cumplan las condiciones estipuladas, y entonces se seguirán trámites analógicos a los que en el capítulo II, título I de este reglamento se determinan respecto de las concesiones de obras del Estado no subvencionadas.

Art. 145. Cuando la obra que se trate de ejecutar se encuentre en el caso del núm. 4.º del artículo 123, el peticionario expondrá su pretensión en una solicitud que dirigirá al Gobernador de la provincia, el cual, mediante los trámites que se determinen en los reglamentos de las leyes especiales y oyendo al Ingeniero Jefe, resolverá sobre la autorización solicitada, imponiendo las condiciones correspondientes para el disfrute de la concesión. Contra la decisión del Gobernador queda al interesado el recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, que decidirá definitivamente.

Por trámites analógicos se resolverán las pretensiones comprendidas en el núm. 5.º del expresado art. 123 del presente reglamento en el caso de que se pretenda que sea perpetua; la resolución corresponde al expresado Ministerio de Fomento.

Art. 146. Podrá hacerse concesiones de dominio público para obras destinadas al ejercicio de una industria privada con arreglo al art. 110 de la ley. Las especiales de Obras públicas y los reglamentos para su ejecución marcarán los trámites que en este caso deberán seguirse para obtener la concesión, a quien corresponda otorgarla, las cláusulas que debe contener y la intervención que en este asunto corresponde a los funcionarios administrativos.

Art. 147. Si con arreglo al artículo 111 de la ley general se pretendiese por una Compañía o particular la concesión de una parte del dominio del Estado para la ejecución de una obra destinada al uso público o al privado, se observarán los mismos trámites que en el presente capítulo se prescriben para la concesión del dominio público; debiendo sin embargo tenerse en cuenta las prescripciones siguientes:

1.º En este caso siempre se hará la concesión mediante subasta pública, que deberá recaer sobre mejora del precio que en el presupuesto aprobado se asigne a la parte del dominio del Estado que se haya de ceder.

2.º Esta subasta se verificará con arreglo a los trámites y requisitos que establecen las leyes e instrucciones vigentes para la enajenación de fincas del Estado, y el importe del remate se satisfará según la misma legislación.

3.º El depósito para poder tomar parte en la subasta será del 1 por 100 del importe del presupuesto de las obras, y la fianza del 5 por 100 del mismo presupuesto, no devolviéndose esta hasta la completa terminación de los trabajos.

Y 4.º En caso de caducidad de la concesión, el concesionario perderá la fianza y las cantida-

des que hubiere abonado por valor del dominio cedido, incautándose el Estado de él para el uso que considere conveniente.

Art. 148. Si la obra que se trate de ejecutar al crase servidumbres establecidas en beneficio del dominio del Estado, se procederá a su concesión por el Ministerio de Fomento o los Gobernadores, según esta hubiese de ser perpetua o temporal, y con arreglo a los trámites indicados en el art. 145 del presente reglamento.

CAPÍTULO IX.

De la declaración de utilidad pública.

Art. 149. A la ejecución de toda obra pública cuya concesión se solicite por particulares y Compañías, deberá preceder en los casos no exceptuados por el art. 114 de la ley general de Obras públicas la declaración de utilidad pública de la obra solicitada.

Art. 150. En toda petición de declaración de utilidad pública se distinguirán dos casos, a saber:

1.º Que no se solicita, mas que el beneficio de vecindad a que se refiere el párrafo primero del art. 115 de la ley general.

2.º Que se pretenda además la aplicación de las leyes de enajenación forzosa de propiedades particulares, en beneficio de la obra que se proyecta.

Art. 151. En el caso primero del artículo anterior, el peticionario presentará un anteproyecto para que sirva de base a una información en los términos prevenidos en los artículos siguientes; este anteproyecto contendrá una Memoria explicativa; planos generales de las obras y un avance de su coste.

Art. 152. Si la obra fuera de carácter municipal y estuviese comprendida dentro de un solo término, se someterá el anteproyecto a una información pública por el plazo de 15 días, correspondiendo al Ayuntamiento la declaración de utilidad en vista del resultado de esta información.

Si la obra, siendo de carácter municipal, afectase a mas de un pueblo, la información se hará en todos aquellos que fueren interesados, y después cada Ayuntamiento por conducto de su Alcalde respectivo elevará el expediente a la Diputación de la provincia, a la que en este caso corresponde hacer la declaración de utilidad.

Art. 153. Si la obra fuese de carácter provincial y afectase solo a una provincia, el anteproyecto se someterá a informe de los Ayuntamientos interesados, y en su vista la Diputación provincial decidirá sobre la declaración.

En el mismo caso de ser la obra de carácter provincial, si afectase a mas de una provincia se hará en cada una la información correspondiente, sometiéndose el anteproyecto a examen de los Ayuntamientos interesados; los Alcaldes respectivos remitirán al Gobernador los expedientes, y dicha Autoridad, oyendo previamente a la Diputación, y con su propio informe, elevará el expediente al Ministro de Fo-

mento, el cual decidirá sobre la declaración en vista de las informaciones seguidas en las provincias correspondientes.

Art. 154. En el caso de que la obra afecte á los intereses generales, y tenga por lo tanto el carácter de obra del Estado, la información sobre la base del anteproyecto se empezará oyendo á los Ayuntamientos interesados, después á la Diputación y Diputaciones de las provincias á que afecte la obra, y los Gobernadores respectivos remitirán al Gobierno los expedientes para que se haga la declaración de Real orden expedida por el Ministerio de Fomento.

Art. 155. Cuando la declaración de utilidad pública estuviera comprendida en el segundo caso del art. 150 y se pretendiere llevar consigo los efectos de la expropiación forzosa de la propiedad privada, el peticionario redactará un proyecto arreglado en un todo á las prescripciones que se determinan en el art. 6.º de este reglamento para las obras del Estado, agregando las tarifas de arbitrios y el cálculo de utilidades presumibles de la Empresa.

El peticionario deberá además presentar los documentos que juzgue del caso para probar la necesidad de la declaración de utilidad, y agregará al proyecto una relación por términos municipales de todos los propietarios cuyas fincas hubiesen de

ocuparse con la ejecución de la obra.

El proyecto se entregará por el peticionario al Gobernador de la provincia, que será el encargado de dirigir la información que ha de preceder á la declaración.

Art. 156. Si la obra fuese de carácter municipal, el Gobernador anunciará en el *Boletín oficial* la petición solicitada, con la lista nominal de los interesados en la expropiación, ordenando al propio tiempo al peticionario que proceda al replanteo de las obras sobre el terreno, de lo cual dará conocimiento al Alcalde del término en que hubiere de ejecutarse la obra, con el fin de que lo ponga en conocimiento de los propietarios interesados y les indique el día ó días en que el replanteo habrá de tener lugar.

El peticionario ó un delegado suyo procederá en los días señalados al citado replanteo, oyendo sobre el terreno á los dueños de las fincas que el trazado hubiere de ocupar y dándoles verbalmente cuantas explicaciones exijan.

Dentro de los 20 días siguientes al de la terminación del replanteo los interesados en la expropiación podrán hacer cuantas reclamaciones consideren pertinentes á su derecho y las dirigirán al Alcalde del pueblo respectivo.

El Ayuntamiento, oyendo previamente á los interesados, dará cuenta al Gobernador de las reclamaciones que se le presenten, y el Gobernador, si las estimare oportunas, las dirigirá al Ministerio de Fomento para su resolución.

Art. 157. Si la obra fuese de carácter provincial, y estuviese comprendida dentro de una sola provincia, el Gobernador hará seguir todos sus trámites que marca el art. 156, y resolverá sobre la declaración, oyendo previamente á la Diputación provincial, al peticionario y al Ingeniero Jefe.

Si la obra fuese de carácter provincial, afectase á los territorios de dos ó mas provincias,

se seguirá en todas ellas reglas iguales á las anteriores, pero los Gobernadores, en vez de resolver, se limitarán á remitir con un informe al Ministerio de Fomento las informaciones seguidas en sus respectivas provincias.

El Ministro de Fomento por medio de una Real orden decretará en este caso sobre la declaración de utilidad.

Art. 159. Cuando se trate de obras que afecten á los intereses generales del Estado, la declaración de utilidad pública se hará por el Ministerio de Fomento, por medio de un Real decreto, después de seguirse todos los trámites que señalan los dos artículos anteriores, y previo informe de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos sobre los expedientes remitidos por los Gobernadores.

Art. 160. Contra las resoluciones que en materia de utilidad pública tome la Administración cabe el recurso por la vía administrativa para ante el superior jerárquico, y luego que la resolución de este cause es adopción procederá la vía contenciosa cuando en los expedientes que al efecto se instruyan se falte á la forma del procedimiento, infringiéndose las disposiciones que regulan los trámites que en ellas se han de observar.

Madrid 6 de Julio de 1877.—Aprobado por S. M.—C. Toreno.

se seguirán en todas ellas reglas iguales á las anteriores, pero los Gobernadores, en vez de resolver, se limitarán á remitir con un informe al Ministerio de Fomento las informaciones seguidas en sus respectivas provincias.

El Ministro de Fomento por medio de una Real orden decretará en este caso sobre la declaración de utilidad.

Art. 159. Cuando se trate de obras que afecten á los intereses generales del Estado, la declaración de utilidad pública se hará por el Ministerio de Fomento, por medio de un Real decreto, después de seguirse todos los trámites que señalan los dos artículos anteriores, y previo informe de la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos sobre los expedientes remitidos por los Gobernadores.

Art. 160. Contra las resoluciones que en materia de utilidad pública tome la Administración cabe el recurso por la vía administrativa para ante el superior jerárquico, y luego que la resolución de este cause es adopción procederá la vía contenciosa cuando en los expedientes que al efecto se instruyan se falte á la forma del procedimiento, infringiéndose las disposiciones que regulan los trámites que en ellas se han de observar.

Madrid 6 de Julio de 1877.—Aprobado por S. M.—C. Toreno.

En el caso de que la obra afecte á los intereses generales, y tenga por lo tanto el carácter de obra del Estado, la información sobre la base del anteproyecto se empezará oyendo á los Ayuntamientos interesados, después á la Diputación y Diputaciones de las provincias á que afecte la obra, y los Gobernadores respectivos remitirán al Gobierno los expedientes para que se haga la declaración de Real orden expedida por el Ministerio de Fomento.

Cuando la declaración de utilidad pública estuviera comprendida en el segundo caso del art. 150 y se pretendiere llevar consigo los efectos de la expropiación forzosa de la propiedad privada, el peticionario redactará un proyecto arreglado en un todo á las prescripciones que se determinan en el art. 6.º de este reglamento para las obras del Estado, agregando las tarifas de arbitrios y el cálculo de utilidades presumibles de la Empresa.

El peticionario deberá además presentar los documentos que juzgue del caso para probar la necesidad de la declaración de utilidad, y agregará al proyecto una relación por términos municipales de todos los propietarios cuyas fincas hubiesen de ocuparse con la ejecución de la obra.

El proyecto se entregará por el peticionario al Gobernador de la provincia, que será el encargado de dirigir la información que ha de preceder á la declaración.

Si la obra fuese de carácter municipal, el Gobernador anunciará en el *Boletín oficial* la petición solicitada, con la lista nominal de los interesados en la expropiación, ordenando al propio tiempo al peticionario que proceda al replanteo de las obras sobre el terreno, de lo cual dará conocimiento al Alcalde del término en que hubiere de ejecutarse la obra, con el fin de que lo ponga en conocimiento de los propietarios interesados y les indique el día ó días en que el replanteo habrá de tener lugar.